



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05308-31-05-001-2019-00270-01 (O2-22-111)
Demandante: YAMILE EUGENIA LÓPEZ MEJÍA
Demandadas: DISOLVENTES Y PETRÓLEOS DE ANTIOQUIA - REFANTIOQUIA S.A.S.
Procedencia: JUZGADO CIVIL CON CONOCIMIENTO EN PROCESOS LABORALES DEL CIRCUITO DE GIRARDOTA
Providencia: SENTENCIA No.220 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022
Asunto: INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN ART.94 CGP

En Medellín, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por **YAMILE EUGENIA LÓPEZ MEJÍA** contra la sociedad **DISOLVENTES Y PETRÓLEOS DE ANTIOQUIA - REFANTIOQUIA S.A.S.**, conocido bajo el radicado único nacional 05308-31-05-001-2019-00270-01 (O2-22-111), en punto a resolver el Recurso de Apelación impetrado por YAMILE EUGENIA LÓPEZ MEJÍA, contra la sentencia que cerró la primera instancia, proferida el 29 de marzo de 2022 por el Juzgado Civil con Conocimiento en Procesos Laborales del Circuito de Girardota.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “*Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones*”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

La señora YAMILE EUGENIA LÓPEZ MEJÍA, actuando por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral contra la sociedad REFANTIOQUIA S.A.S., en orden a

que se declare que entre las partes existió un contrato verbal de trabajo a término indefinido entre el 09 de marzo de 2015 y el 30 de noviembre de 2017, y que el mismo terminó sin justa causa imputable al trabajador; y en consecuencia, obtener el pago de los salarios causados desde el 01 de octubre de 2016, las cesantías y los intereses sobre las cesantías causados desde el 01 de enero de 2016, las primas de servicio causadas desde el 01 de julio de 2016, las vacaciones causadas desde el 09 de marzo de 2015, y los aportes para el Sistema de Seguridad Social generados desde el 01 de julio de 2016; y con el fin de obtener el reconocimiento de las indemnizaciones por la falta de pago de los intereses sobre las cesantías, por la falta de pago de salarios y prestaciones sociales, por la falta de consignación de las cesantías, y por el despido sin justa causa.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones la señora YAMILE EUGENIA LÓPEZ MEJÍA expuso que laboró al servicio de la sociedad REFANTIOQUIA S.A.S. entre el 09 de marzo de 2015 y el 30 de noviembre de 2017, que la relación de trabajo se formalizó mediante la suscripción de un contrato de trabajo a término indefinido, desempeñó el cargo de coordinadora contable, y el último salario devengado fue de \$3.210.000 mensuales. Adujo que desde el 01 de octubre de 2016 la sociedad REFANTIOQUIA S.A.S. empezó a incumplir de forma sistemática con el pago de los salarios, las prestaciones sociales, y los aportes a la seguridad social, y que durante la vigencia de la relación de trabajo no tuvo vacaciones, ni fueron compensados en dinero. Refirió que el 30 de agosto de 2017 la sociedad REFANTIOQUIA S.A.S. le notificó la terminación del contrato sin justa causa, pero continuó prestando sus servicios hasta el 30 de noviembre de 2017, con la esperanza de que se le pagara lo adeudado, fecha en la que verbalmente le notificaron que no había más trabajo, y que, aunque el 30 de agosto de 2017 recibió una carta de liquidación del contrato de trabajo, lo cierto, asevera, es que las cifras descritas nunca se cancelaron.

1.1. Trámite de Primera Instancia

La demanda se admitió 18 de noviembre de 2019 (pág.60, doc.01, carp.01), y se notificó a la sociedad DISOLVENTES Y PETRÓLEOS DE ANTIOQUIA - REFANTIOQUIA S.A.S. el 20 de abril de 2021 (doc.03, carp.01), la cual presentó contestación el 07 de mayo del mismo año (doc.06, carp.01), escrito en el que admitió que la señora YAMILE EUGENIA LÓPEZ MEJÍA laboró a su servicio entre el 09 de marzo de 2015 y el 30 de noviembre de 2017, que la relación de trabajo se formalizó mediante la suscripción de un contrato de trabajo a término indefinido, que la actora desempeñaba el cargo de coordinadora contable, y devengaba un salario de \$3.210.000 mensuales para la fecha de terminación del contrato. Señaló que siempre cumplió con los pagos que le incumbían en su calidad de empleadora, en la medida de sus posibilidades económicas, que durante la vigencia de la relación de trabajo la demandante

disfrutó de siete (7) días de vacaciones, la actora continuó prestando sus servicios con posterioridad a la notificación de la terminación del contrato, con la finalidad de sacar adelante la compañía, que el 28 de noviembre de 2017 presentó renuncia a partir del día 30 del mismo mes y año, aduciendo que le acababan de “... *hacer una oferta laboral la cual es bastante interesante para mí a nivel profesional y personal*”. Finalmente, asintió que el término de prescripción solo se interrumpió con su notificación, y no con la presentación de la demanda, porque la notificación se surtió después de haber transcurrido más de un año desde la admisión del proceso, incluso considerando la suspensión de términos que se decretó por la Pandemia Covid-19. Complementariamente, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, y de fondo excepcionó prescripción, compensación y buena fe.

1.2. Sentencia de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 29 de marzo de 2022 (doc.10, carp.01) por el Juzgado Civil con Conocimiento en Procesos Laborales del Circuito de Girardota, mediante sentencia en la que se declaró que la relación laboral que existió entre YAMILE EUGENIA LÓPEZ MEJÍA y la sociedad DISOLVENTES Y PETRÓLEOS DE ANTIOQUIA - REFANTIOQUIA S.A.S., terminó el 30 de noviembre de 2017, sin que se hubieran cancelado los salarios, prestaciones, vacaciones, aportes e indemnizaciones adeudadas; se declaró probada la excepción de prescripción respecto de los salarios, prestaciones, vacaciones e indemnizaciones deprecadas; y se condenó a la sociedad demanda a pagar en favor de la demandante, los aportes a la seguridad social caudados entre el 01 de julio de 2016 y el 30 de noviembre de 2017, sobre un IBC de \$3.210.000.

Para sustentar su decisión, la cognoscente de primer grado argumentó que la entidad demandada no acreditó el pago de los salarios causados en favor de la demandante desde el 01 de octubre de 2016, como también de las cesantías y los intereses sobre estas causados desde el 01 de enero de 2016, de las primas de servicio causadas desde el 01 de julio de 2016, de las vacaciones causados desde el 09 de marzo de 2015, y de los aportes para el Sistema de Seguridad Social causados desde el 01 de julio de 2016; que la sociedad llamada a juicio dejó de pagar tales conceptos con ocasión de las dificultades económicas que tuvo para seguir operando, y que finalmente la llevaron a su liquidación, y no por un actuar malicioso o fraudulento; que la radicación de la demanda no tuvo la vocación de suspender el término de prescripción porque la notificación de la sociedad demandada se produjo transcurrido más de un año desde su admisión, por la falta de diligencia en la que incurrió la demandante; que las disposiciones de la Ley 1116 de 2006, referidas a la suspensión del término de prescripción, no son aplicables al trámite del proceso ordinario laboral, por tener éste disposición expresa que regula la materia; que entre la fecha de terminación del contrato y

la fecha de notificación de la demandante transcurrieron más de los tres años al que hace referencia los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS; y que la obligación de pagar los aportes para la Seguridad Social, no es objeto de prescripción, por ser un derecho irrenunciable.

1.3. Recurso de Apelación

Inconforme con la decisión antes descrita, el apoderado judicial de la señora YAMILE EUGENIA LÓPEZ MEJÍA (minuto 02:34:30, link audiencia, doc.10, carp.01), interpuso el recurso de apelación en orden a que se revoque el fallo de primer grado, en cuanto absolvió a la compañía demandada de las indemnizaciones moratorias instadas, y declaró probada la excepción de prescripción, arguyendo que la liquidación de la sociedad REFANTIOQUIA S.A.S. no se produjo solo por el alza en los precios del petróleo y las dificultades económicas que atravesó, sino también, por los malos manejos administrativos, los cuales dejan entrever que no actuó con buena fe, máxime si se tiene en cuenta que, aunque dedujo del salario de su prohijada el porcentaje correspondiente para los aportes a la Seguridad Social, no realizó el referido pago, apropiándose de los dineros de la trabajadora. Así mismos, argumentó que el despacho solo lo requirió para efectuar la notificación de la demandada el 24 de marzo de 2021, que el trámite de liquidación obligatoria de las entidades societarias está gobernado por la Ley 1116 de 2006 que dispone la interrupción de la prescripción desde que inicia el proceso de liquidación y hasta su culminación, que entre la fecha de terminación del contrato, y la fecha en que inició la liquidación de la entidad demanda no transcurrieron los tres años previstos por la legislación para que operara la prescripción, y que la Ley 1116 de 2006 no excluye de su campo de aplicación, los derechos laborales que se controvierten ante la jurisdicción ordinaria, por lo que su aplicación no supone una referencia análoga.

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación se admitió el 19 de abril de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 25 del mismo mes y año (doc.03, carp.02), se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, presentaran los alegatos de conclusión por escrito.

La señora YAMILE EUGENIA LÓPEZ MEJÍA alegó el 03 de mayo de 2022 (doc.04, carp.02), destacando que los artículos 50 y 72 de la Ley 1116 de 2006 establecen la interrupción del término de prescripción desde el inicio del proceso de liquidación y hasta la adjudicación, que el pago de las acreencias laborales deprecadas se hizo exigible el 30 de noviembre de 2017, que el proceso de liquidación de la sociedad demandada inició el 29 de marzo de 2019, y aún se encuentra en curso, y que entre ambas fechas no transcurrió el término de

prescripción extintiva. Adujo que la normativa que rige el trámite de los procesos laborales ni del proceso de liquidación restringen la aplicación de la normativa antes descrita para el procedimiento liquidatorio; que en la sentencia C-263 de 2002 se adocrinó que las acciones que pueden intentar los acreedores para la satisfacción de las obligaciones insolutas del deudor, están sujetas interrupciones previstas en el artículo 102 de la Ley 222 de 1995, la cual, antaño gobernaba el proceso de liquidación judicial actualmente regulado por la Ley 1116 de 2006, y que los antecedentes expuestos por la Superintendencia de Sociedades al ordenar la apertura del proceso liquidatorio, dan cuenta de que la liquidación de la empresa se produjo por un desgreño administrativo que no permite situar al empleador en el terreno de la buena fe que lo exonera del reconocimiento de las indemnizaciones deprecadas.

Por su parte, la sociedad DISOLVENTES Y PETRÓLEOS DE ANTIOQUIA - REFANTIOQUIA S.A.S. alegó el 04 de mayo de 2022 (doc.05, carp.02), ahincando que se confirme la sentencia de primer grado, con el argumento de que el contrato de trabajo terminó el 30 de noviembre de 2017, la demanda se presentó el 08 de noviembre de 2019, el juzgado admitió la acción ordinaria el 18 de noviembre de 2019, y la notificación solo se efectuó el 20 de abril de 2021, por fuera del término previsto en el artículo 94 del CGP, y habiendo transcurrido más de tres años desde la fecha de terminación del contrato. Finalmente, aseveró que los eventuales incumplimientos en los que pudo haber incurrido, lejos de ser maliciosos o torticeros, se produjeron como consecuencia de la ausencia absoluta de recursos económicos o de liquidez, circunstancia que fue documentalmente probada, y que los declarantes al interior del trámite admitieron conocer.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora YAMILE EUGENIA LÓPEZ MEJÍA, advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema Jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a determinar si el fenómeno extintivo de la prescripción operó respecto de las acreencias derivadas de la relación de trabajo que existió entre YAMILE EUGENIA LÓPEZ MEJÍA y DISOLVENTES Y PETRÓLEOS DE ANTIOQUIA - REFANTIOQUIA S.A.S.; en caso negativo, la Sala se ocupará de establecer si a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de las indemnizaciones por la falta

de pago de salarios y prestaciones sociales, al igual que por la falta de consignación de las cesantías.

2.2. Sentido del Fallo

La Sala confirmará la sentencia de primer grado, en cuanto declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, siendo que este fenómeno jurídico enervante de los derechos sociales frente a las acreencias pretensas no se interrumpió con la radicación de la demanda, por no haberse acreditado la debida diligencia en la gestión para su notificación, sino con la notificación del auto admisorio a la sociedad demandada, sin que al presente proceso le sean aplicables las normas procedimentales propias del proceso concursal previstas para la liquidación judicial obligatoria.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que el 09 de marzo de 2015 la señora YAMILE EUGENIA LÓPEZ MEJÍA y la sociedad DISOLVENTES Y PETRÓLEOS DE ANTIOQUIA - REFANTIOQUIA S.A.S., suscribieron un contrato de trabajo a término indefinido en virtud del cual la actora desempeñó el cargo de coordinadora contable (págs.18-23, doc.01, carp.01), que el reporte de movimientos de la cuenta individual de cesantías de la demandante solo registra la

consignación de las cesantías consignadas en el año 2016 y causadas el año 2015 (pág.26, doc.01, carp.01); que el resumen de semanas cotizadas por la actora solo refleja el pago de los aportes causados hasta el 30 de junio de 2016 (págs.27-37, doc.01, carp.01); que el 30 de agosto de 2017 la sociedad REFANTIOQUIA S.A.S. le notificó a la demandante la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada (pág.38, doc.01, carp.01); que en la misma fecha la sociedad REFANTIOQUIA S.A.S. liquidó el valor adeudado a la trabajadora por concepto de salarios, prestaciones, vacaciones e indemnización por despido injusto (pág.39, doc.01, carp.01); que la actora continuó prestando sus servicios hasta el 30 de noviembre de 2017, cuando voluntariamente renunció al cargo, con el fin de aceptar otra propuesta laboral (pág.72, doc.06, carp.01), y que el último salario devengado por la demandante ascendió a la suma de \$3.210.000 mensuales (págs.24-25, doc.01, carp.01).

Tampoco se discute que mediante el Oficio 2018-01-402619 del 10 de septiembre de 2018, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES inadmitió la solicitud de reorganización radicada por la sociedad DISOLVENTES Y PETRÓLEOS DE ANTIOQUIA - REFANTIOQUIA S.A.S. el 31 de mayo del mismo año (págs.49-58, doc.06, carp.01), y que a través del Auto 2019-01-084164 del 29 de marzo de 2019, decretó el inicio del proceso de liquidación judicial de la misma sociedad, de conformidad con lo establecido en la Ley 1116 de 2006 (pag.65-71, doc.06, carp.01).

2.3.1. De la prescripción de los derechos sociales

La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, al ejercerse actos de posesión sobre las cosas, y no haberse ejercido las acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, con el cumplimiento de los demás requisitos legales (artículo 25112 del CC); institución jurídica que, podría decirse, define dos figuras diferentes, por una parte, la prescripción adquisitiva, también conocida como usucapión, por su etimología latina *usucapionem*, (*usus-uso-* y *capere-tomar-*), es un título de adquisición de derechos reales, por la posesión ejercida durante el tiempo y bajo las condiciones exigidas por la Ley, se adquiere por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles, que están en el tráfico jurídico comercial, y se han poseído con las condiciones exigidas (artículo 2518 del CC); y por otra parte, la prescripción extintiva o liberatoria, que es un modo de extinguir derechos u obligaciones, como resultado de su no reclamación, alegación, o defensa durante el tiempo determinado por la ley (artículo 2535 del CC), por cualquier razón que motive la inacción de su titular, dejando salvas las suspensiones determinadas por la legislación en favor de ciertas personas.

En otras palabras, la prescripción se presenta por la inactividad del beneficiario, durante el lapso consagrado en la ley, del ejercicio de la acción, haciendo presumir el abandono del

derecho; y se justifica por motivos de orden práctico, en tanto se pretende que las relaciones jurídicas no se mantengan inciertas y que las situaciones de hecho que se prolonguen en el tiempo se solucionen, por esta razón se le limita el derecho de acción para que sea ejercido en un término razonable en la búsqueda de la seguridad jurídica. En efecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene dicho, que “... *la prescripción, como modo de extinguir las obligaciones, es una excepción legítima al postulado de la irrenunciabilidad de derechos, en cuanto propende por la realización de otros valores como la aludida seguridad jurídica y el ejercicio responsable de los derechos*” (CSJ SL-16798 del 04-11-2015, radicado 43128).

Por tanto, el legislador, a efectos de garantizar la estabilidad jurídica de los asociados y consolidar sus derechos, fija en cada especialidad un tiempo dentro del cual deben ser reclamados, so pena de operar frente a aquellos la prescripción. Así los artículos 488 del CST y el 151 del CPTSS, conceden a los trabajadores la oportunidad de impetrar sus súplicas dentro de los tres (3) años siguientes a su exigibilidad, en tanto que el artículo 489 del CST prevé que dicho lapso se puede interrumpir, por una sola vez, con el simple reclamo escrito que el trabajador formule a su empleador sobre un derecho debidamente determinado y que este reciba, para que, a partir de ese momento, se reinicie el conteo del trienio para reclamar por vía judicial.

Así mismo, el artículo 94 del CGP, vigente para la época de los hechos, y aplicable a los procesos laborales en virtud de lo dispuesto por el artículo 145 del CPTSS, prevé la posibilidad que el término de tres años se entienda interrumpido desde la fecha de radicación de la demanda inicial, siempre que el auto admisorio “... *se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante*”, y una vez transcurrido ese tiempo, los efectos jurídicos de la interrupción de la prescripción solo se producirán a partir de la notificación del auto admisorio.

Ahora bien, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha adocetrinado que la regla establecida en el artículo 94 del CGP, otrora artículo 90 del CPC, referente a que la presentación del libelo inaugural interrumpe el término prescriptivo siempre y cuando el auto admisorio se «notifique» al demandado dentro del año siguiente a la notificación del auto admisorio de la acción al demandante, no aplica cuando dicha «notificación» no se efectúa oportunamente por negligencia del juzgado, o por actividad elusiva del demandado, como quiera que esa eventualidad no puede redundar en perjuicio del promotor del litigio.

Sobre el particular, el tribunal de casación laboral ha previsto en su jurisprudencia que “... entre la presentación de una demanda y su notificación pueden generarse diversas eventualidades, que no son imputables a quien funge como demandante y que, por lo mismo, no pueden redundar en su perjuicio. En tal orden, se ha aceptado que **«... la sola presentación de la demanda interrumpe la prescripción cuando la notificación del auto admisorio de la misma no se efectúa oportunamente por negligencia del juzgado o por actividad elusiva del demandado...»**

Dichas excepciones a la regla de interrupción de la prescripción están fundadas en la prevención de conductas reprochables desde todo punto de vista, que tienden al abuso de la disposición por parte de los deudores y, en materia laboral, en una protección especial para el trabajador que acude a tiempo a reclamar sus derechos y que realiza todas las acciones que están a su alcance para lograr la notificación de la demanda, por lo que no se le puede sancionar con la prescripción, a pesar de haber actuado diligentemente.

Acorde con tales postulados éticos, recogidos como normas de obligatorio cumplimiento por la legislación positiva, observa esta Sala que la sola presentación de la demanda interrumpe la prescripción cuando la notificación del auto admisorio de la misma no se efectúa oportunamente por negligencia del Juzgado o por actividad elusiva del demandado, ya que **repugna al ordenamiento jurídico que la actora que obra con rectitud y satisface las cargas procesales que sobre él pesan tenga, sin embargo, que soportar consecuencias jurídicas desfavorables por conductas reprochables a la incuria de funcionarios judiciales o a maniobras de la parte contraria, que, posteriormente, resultase beneficiada de su propia conducta contraria a derecho**” (CSJ SL del 12-02-2004, radicado 21062; reiterada en SL-8716 del 07-07-2014; SL-1533 del 02-05-2018, radicado 60514; SL-943 del 20-03-2019, radicado 57258; SL-1356 del 13-04-2021, radicado 84484, entre otras – Negrillas de la Sala).

Extrapolando lo antes expuesto al proceso de la referencia, se evidencia que la señora YAMILE EUGENIA LÓPEZ MEJÍA, presentó el incoativo el 08 de noviembre de 2019 (págs.01-04, doc.01, carp.01), que el Juzgado Civil con Conocimiento en Procesos Laborales del Circuito de Girardota admitió la acción ordinaria el 18 de noviembre de 2019, decisión que se notificó al demandante el día 19 del mismo mes y año (págs.60-61, doc.01, carp.01); que el 24 de marzo de 2021 se requirió a la parte actora para que gestionara la notificación de la sociedad demandada, siendo que no había acreditado el despliegue de ninguna gestión para el efecto (doc.02, carp.01), y que la sociedad DISOLVENTES Y PETRÓLEOS DE ANTIOQUIA - REFANTIOQUIA S.A.S. fue notificada el 20 de abril de 2021 (doc.03, carp.01).

Sin embargo, conviene memorar que los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para derechos, acciones, medios control, o presentar demanda judiciales o ante los tribunales arbitrales, sean de meses o años, estuvieron suspendidos debido a la emergencia sanitaria generada por la Pandemia Covid-19 (Decreto 564 de 2020), suspensión que inició el 16 marzo 2020 y se extendió hasta el 30 de junio de 2020, de conformidad con lo previsto en los Acuerdos PCSJA20-11517 del 15-03-2020 (del 16/03/2020 al 20/03/2020), PCSJA20-11521 del 19-03-2020 (del 21/03/2020 al 03/04/2020), PCSJA20-11526 DEL 22-03-2020 (del 04/04/2020 al 12/04/2020), PCSJA20-11532 DEL 11-04-2020 (del 13/04/2020 al 26/04/2020), PCSJA20-11546 del 25-04-2020 (del 27/04/2020 al 10/05/2020), PCSJA20-11549 del 07-05-2020 (del 11/05/2020 al 24/05/2020), PCSJA20-11556 del 22-05-2020 (del 25/05/2020 al 08/06/2020) y PCSJA20-11567 del 05-06-2020 (del 09/06/2020 al 30/06/2020).

A partir del recuento de las vicisitudes procesales enunciadas en el presente diligenciamiento, colige la Sala que el auto admisorio de la demanda fue notificado después de vencido el término de un (1) año a que alude el citado artículo 94 del CGP, y que ello tuvo como génesis o causa, la conducta descuidada o incuriosa de la parte demandante, la que solo gestionó la notificación de la sociedad demandada, previo requerimiento del juzgado, en la fecha 20 de abril de 2021 (doc.03, carp.01), habiendo transcurrido trece (13) meses y dieciocho (18) días desde la notificación al demandante de la admisión de la demanda el día 19 de noviembre de 2019 (págs.60-61, doc.01, carp.01), discriminados en los tres (3) meses y veintiocho (28) que corrieron entre el 19 de noviembre de 2019, cuando se notificó al demandante de la admisión de la demanda (págs.60-61, doc.01, carp.01) y el 16 de marzo de 2020 cuando se suspendieron los términos prescripción y de caducidad (Acuerdo PCSJA20-11517 del 15-03-2020), y en los nueve (9) meses y veinte días (20) que corrieron del 01 de julio de 2020, cuando se reanudaron los términos prescripción y de caducidad (Acuerdo PCSJA20-11567 del 05-06-2020) y el 20 de abril de 2021 cuando se surtió la notificación de la sociedad demandada (doc.03, carp.01).

Consiguientemente, este Colegiado encuentra que la notificación del auto admisorio de la demanda dejó de efectuarse oportunamente, no por la negligencia del juzgado, ni por actividad elusiva del demandado, sino por la conducta descuidada o incuriosa de la parte demandante, y por ello, la presentación de la demanda no tuvo la vocación de interrumpir el término de prescripción, y que dicho efecto solo se produjo con la notificación de la sociedad demanda, en los términos previstos en el artículo 94 del CGP.

Ahora bien, en cuanto a las prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones moratorias reclamadas por la señora YAMILE EUGENIA LÓPEZ MEJÍA, y presuntamente adeudadas por la sociedad DISOLVENTES Y PETRÓLEOS DE ANTIOQUIA - REFANTIOQUIA S.A.S., se tiene que las

mismas se causaron entre el 09 de marzo de 2015 y el 30 de noviembre de 2017, y se hicieron exigibles, a más tardar, para la fecha de terminación del contrato de trabajo, que se itera, ocurrió el 30 de noviembre de 2017, y que la notificación de la sociedad DISOLVENTES Y PETRÓLEOS DE ANTIOQUIA - REFANTIOQUIA S.A.S., ocurrió el 20 de abril de 2021 (doc.03, carp.01), esto es, después de haberse vencido el término trienal a que aluden los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, teniendo en cuenta que entre ambas fechas transcurrieron tres (3) años, cuatro (4) meses y veintiún (21) días, siendo entonces lo procedente confirmar la sentencia de primera instancia.

Ahora bien, el recurrente considera que de conformidad con lo establecido en el numeral 8° del artículo 50 la Ley 1116 de 2006, la declaratoria judicial del proceso de liquidación produjo la interrupción del término de prescripción de la acción judicial de la referencia, interpretación de la que se aparta esta Corporación, en tanto en cuanto que el instituto de la prescripción y su interrupción en materia laboral se encuentra regulado en los artículos 488 y 489 del CST, que disponen:

“ARTICULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto”

“ARTICULO 489. INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente”.

Al igual que la preceptiva anterior, el artículo 151 del CPTSS también se ocupa de la figura de la prescripción y su interrupción en los siguientes términos:

“ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.

A criterio del máximo tribunal de casación laboral, los citados preceptos “... no contienen un defecto lógico o un vacío en punto a las consecuencias del simple reclamo realizado al empleador, que obligue al juez a remitirse a otras disposiciones, por la potísima razón de que ellos regularon íntegramente los efectos de esta figura y, al hacerlo, solo le atribuyeron el poder de interrumpir la prescripción, esto es, que el término que esté corriendo «principia a

contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente»" (CSJ SL9373-2017, reiterada, entre otras, en las sentencias SL1063-2019, SL840-2021). Por manera que, para esta Corporación es improcedente la remisión a los preceptos normativos indicados por la recurrente, pues recuérdese que la analogía para los asuntos del trabajo y la seguridad social se encuentra autorizada siempre que no exista una norma especial aplicable al caso (artículo 145 del CPTSS).

Es por todo lo anterior que, para este juzgador plural la interpretación sugerida por el recurrente, según la cual los efectos de la apertura del proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades, atinentes a la interrupción del término de prescripción y la inoperancia de la caducidad de las acciones respecto de las obligaciones que contra el deudor estuvieren perfeccionadas o sean exigibles desde antes del inicio del proceso de liquidación judicial previsto en la Ley 1116 de 2006, que instituye el régimen de insolvencia empresarial, debe aplicarse en el proceso ordinario judicial reglado por el Decreto 2158 de 1948, modificado por las Leyes 712 de 2001 y 1149 de 2007 (CPTSS), de cuyo inobserva no solo el principio de inescindibilidad o conglobamiento normativo, sino también el derecho iusfundamental al debido proceso, del que se desprende el respeto por la plenitud de las formas propias de cada juicio (artículo 29 de la CP), por lo que abundan razones suficientes para impartir confirmación a la providencia confutada.

4. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del CGP, las costas de la segunda instancia estarán a cargo de YAMILE EUGENIA LÓPEZ MEJÍA, por habérsele resuelto desfavorablemente el recurso de apelación propuesto, y con arreglo a lo previsto en el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho a favor de la sociedad REFANTIOQUIA S.A.S., la suma de \$500.000, que corresponde a medio (½) SMMLV.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

5. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de marzo de 2022 por el Juzgado Civil con Conocimiento en Procesos Laborales del Circuito de Girardota, dentro del proceso

ORDINARIO LABORAL promovido por YAMILE EUGENIA LÓPEZ MEJÍA contra la sociedad DISOLVENTES Y PETRÓLEOS DE ANTIOQUIA - REFANTIOQUIA S.A.S., de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de YAMILE EUGENIA LÓPEZ MEJÍA, fijándose como agencias en derecho, en favor de la sociedad REFANTIOQUIA S.A.S., la suma de \$500.000.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, acogiendo el criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia vertido en el auto AL-2550 del 23-06-2021, radicado 89.628, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


VÍCTOR HUGO ORIOUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
Magistrada


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario